

## **BASE TERCERA. MERITOS**

### **APARTADO 2.3 PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE LA PLAZA SOLICITADA.**

Comienzo destacando que he decidido optar a un tercer mandato al frente del TSJA. Soy consciente del tiempo transcurrido hasta el momento en dicho cargo, si bien ha pesado en mi decisión el hecho de sentirme animado por muchos compañeros.

Me pongo a disposición del CGPJ para que, en su caso, valore si la experiencia acumulada y el conocimiento adquirido durante este tiempo sobre la situación y necesidades del extenso y complejo territorio judicial andaluz, puede ser útil ante el devenir cercano de profundos cambios, con importantes novedades y reformas procesales en torno a la implantación de los llamados Tribunales de Instancia y formas colegiadas de trabajo, en paralelo al necesario proceso de implantación de la nueva oficina judicial, así como importantes retos tecnológicos.

En este sentido, mantengo intacta la voluntad y el compromiso constante para ser útil y seguir aportando todo lo mejor de mí mismo para una administración de justicia más eficiente en momentos de transformación y de reformas -tan necesarias- tanto organizativas como tecnológicas como procesales.

Debo señalar que, al explicitar seguidamente el programa de actuación para el desempeño de la plaza solicitada, me siento obligado a significar también actitudes y actuaciones propias de mi anterior mandato, ya que muchas de ellas necesitan reafirmarse y reforzarse día a día, de forma que se convierten igualmente en propuestas de futuro.

Destaco dos bloques o líneas de actuación, la primera de carácter personal e institucional, y la segunda, organizativa, con propuestas para el mejor funcionamiento de nuestros Juzgados y Tribunales.

#### **IV.b)1º Líneas de actuación de carácter personal e institucional.**

1. Cuidaré, como hasta ahora, las relaciones personales e institucionales con cualesquiera autoridades y profesionales, todo ello desde una posición de equilibrio e independencia.

Me esforzaré por mantener el actual clima de entendimiento con tantos colectivos implicados, que siempre fructifica en un mejor servicio público y correcta administración de justicia. Se trata de conseguir relaciones normalizadas, necesarias para abordar puntos de encuentro que resuelvan la abundante problemática surgida en el devenir diario.

Qué decir tiene que esta actitud ha sido especialmente intensa y necesaria para gestionar la abundante problemática en contextos de grave crisis socioeconómica y judicial surgida en diferentes anualidades y, posteriormente, con motivo de la situación de pandemia derivada del coronavirus.

Procuraré seguir la línea de plena colaboración con los actuales responsables políticos de la Consejería de Justicia, al igual que he intentado con los anteriores, así como con representantes de los Colegios profesionales y cuantas entidades coadyuvan al servicio público de justicia.

En esta línea, continuaré con mi compromiso de plena accesibilidad y comunicación con Jueces y Magistrados, extensivo a cualquier interesado, y deseos

de plena disponibilidad. Por lo mismo, se intentará siempre que los nuevos jueces se sientan correctamente atendidos y acogidos en su primer destino.

2. Mantendré un discurso institucional de reconocimiento al poder judicial, explicando y poniendo en valor el trabajo que diariamente realizamos, al tiempo que tendrán cabida reflexiones y una llamada al esfuerzo por mantener intacta la voluntad de servicio, por afanarnos diariamente en administrar una justicia de calidad, incluso con medios inadecuados e insuficientes. Se trata de conseguir la necesaria legitimación por el ejercicio profesional, que depende exclusivamente de la calidad en el trabajo, la transparencia, la motivación y el comportamiento personal.

Por tanto, insistiré en la importancia de humanizar el ejercicio de nuestra profesión: a) darle sentido a la asistencia y presencia en el Juzgado, b) valorar la importancia de relaciones normalizadas con los profesionales, con los ciudadanos, con la prensa y gabinetes de comunicación, de forma que cale y se interiorice plenamente la idea de la justicia como un servicio público.

3. Buscaré la plena colaboración y entendimiento con la Sala de Gobierno, como he tratado de conseguir hasta el momento, de forma que se evidencie el mayor consenso posible en Acuerdos gubernativos que afectan al buen desenvolvimiento de los órganos judiciales del territorio. Asimismo, reforzaré que nuestra actuación e imagen siga siendo lo más cercana y transparente, al tiempo que permita sentirse representados a todos los jueces del territorio.

Se trata de evitar una gestión excesivamente jerarquizada y lograr un proyecto de trabajo común, que fructifique en compromisos y soluciones consensuadas y eficaces, cuyo hilo conductor sea la mayor transparencia y participación.

Potenciaré la presencia de la Sala de Gobierno en el extenso territorio andaluz, con desplazamiento para reuniones con colectivos y profesionales a nivel provincial (así, por ejemplo, se ha efectuado en Sevilla, Cádiz, Málaga). Igualmente, para tomas de posesión de Presidentes de Audiencias Provinciales, encuentros con motivo de presentación de memorias judiciales, etc.

4. Seguiré en la línea de generalizar visitas de información y conocimiento a muchos Juzgados (arts. 152.1.7º, 152.2.2º y 172.4 LOPJ), en especial a órganos con cierta problemática, como fórmula idónea de resolver disfunciones en su funcionamiento y formular propuestas de actuación urgente.

Así, anualmente, se han efectuado múltiples visitas de conocimiento y encuentros periódicos con responsables de órganos o jurisdicciones complicadas (Audiencias de Málaga y Sevilla, singularmente; Juzgados de lo social y mercantil de Almería, Málaga y Sevilla; Juzgados de condiciones generales de contratación bancaria en Cádiz, Málaga, Sevilla y Córdoba; Juzgados unipersonales de Lora del Río, Utrera, Sanlúcar la Mayor, Ayamonte, Moguer, Estepona, Marbella, Berja, Roquetas, Santa Fé, Barbate, Algeciras, La Línea de la Concepción, etc. etc.)

En esta línea de actuación, además, se han inspeccionado en cada anualidad una media de 70 órganos judiciales.

5. Se mantendrá la fluida relación del Gabinete de Comunicación del TSJA con los Jueces y Magistrados, tratando de vencer reticencias todavía existentes e insistir en que hay que dar un paso más allá, de forma que los jueces y magistrados se conviertan en agentes activos de la comunicación judicial trasladando al Gabinete de Comunicación resoluciones judiciales de interés para la sociedad, o por la novedad de

sus planteamientos. En definitiva, explicar qué se hace y cómo se hace, para conseguir el objetivo último de fortalecer la confianza pública en la Justicia.

Desde la Presidencia del TSJA no se ha dejado de insistir en que el Gabinete de Comunicación forma parte de la estructura judicial y, por tanto, en la necesaria y lógica colaboración de los órganos judiciales en los casos en que son objeto de demanda de información por los asuntos que conocen, respetando las lógicas prevenciones legales y jurisprudenciales.

En todo este contexto, se dictó un Acuerdo por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, indicando que "sin perjuicio de las competencias que la LOPJ atribuye a la oficina judicial en esta materia (arts 234, 235 bis, 235 ter, 236 quinquies, 266 y 453.2), la Sala de Gobierno recuerda lo dispuesto en el art. 234 LOPJ, ya que las oficinas de comunicación de los TJS forman parte de la estructura organizativa del CGPJ y ostentan pleno interés en acceder a las sentencias judiciales (tienen la condición de interesado a los efectos de los artículos 235 y 266 LOPJ) que, por lo demás, son públicas desde la firma por el juez o magistrados que las dictan".

Asimismo, deben resaltarse el Protocolo de colaboración con el TSJA y el Colegio de Periodistas, así como las reuniones periódicas con el Consejo Audiovisual de Andalucía y el consenso en torno a una guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales (ver archivos adjuntos).

6. Seguiré manteniendo periódicamente reuniones singularizadas, en especial a través de Presidentes de Salas y/o Audiencias, para reforzar la solución a muy diversas cuestiones que se reproducen en el día a día: a') profundizar en los principios de unidad de criterios y seguridad jurídica a través de los plenillos de cada orden jurisdiccional, de forma que, como ahora sucede, se eleven las conclusiones a la Sala de Gobierno para conocimiento y posterior publicidad en la extranet del CGPJ, b') solucionar cuestiones de enorme calado y actualidad: depósito de bienes, comiso droga, auxilio policial, destrucción de bienes intervenidos, expurgo de documentación, etc., c') mejorar la coordinación institucional a través de las Comisiones de coordinación contra la violencia de género en aras de la mayor implicación y coordinación institucional. Mejorar los protocolos de actuación y que la justicia tenga conocimiento con la mayor antelación posible de todo tipo de situaciones de conflicto que puedan incidir en valoraciones futuras de riesgo. Mejorar las valoraciones de riesgo en los distintos ámbitos: policial, médico-forense y judicial. Revisar los protocolos para mejorar la capacidad predictiva, d') coordinar y homogeneizar los llamamientos de magistrados suplentes y jueces sustitutos, e') gestionar con eficiencia los acuerdos de Presidencia relativos a la adscripción de los JATs y jueces en expectativa de destino para dar la mejor respuesta a las situaciones de vacante de larga duración o necesidad de medidas de apoyo judicial.

7. Continuaré la comunicación con responsables de Colegios profesionales y otras instituciones sobre temas que repercuten en la mejora del servicio. En esta línea, se ha consensuado y actualizado un Código de Buenas Prácticas en la Administración de Justicia Andaluza, asumido por los representantes institucionales de los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de Andalucía (ver archivo adjunto). Como es lógico, no es nuevo ni, por supuesto, absolutamente novedoso en el marco de las relaciones interpersonales o interinstitucionales. Busca, que no es poco, mejorar la imagen, calidad y eficacia de nuestra administración de justicia, porque existen

disfunciones en las formas de actuar y queda un amplio margen de mejora en el día a día judicial.

#### **IV.b)2º Líneas de actuación de carácter organizativo para el mejor funcionamiento de los Juzgados y Tribunales.**

1. Apostar abiertamente, con decisión y firmeza, por mecanismos complementarios y/o alternativos para la solución de conflictos, frente a las reticencias claramente detectadas hasta el momento.

Promoveré sin fisuras la cultura de la mediación e implicar a los colectivos profesionales, a los colegios y universidades, en aras a evitar un uso indebido del proceso y la gran judicialización de los conflictos en el territorio andaluz (sobreutilización del proceso y sobrecarga innecesaria en los Juzgados).

Hay que educar a la sociedad en su uso racional, conscientes de que la justicia es un valor a preservar, al tiempo que un servicio público. El ciudadano tiene que comprender qué es un sistema de justicia al tiempo y la importancia de contar con un buen sistema de prevención. Por tanto, que el ideal es reconocer que hay muchísimos conflictos que deben solucionarse sin llegar al proceso. Tenemos que seguir extendiendo la cultura de la solución consensuada y extrajudicial de los conflictos, porque estamos en una sociedad muy judicializada y acostumbrada a que “otros” nos resuelvan siempre el problema.

Como es lógico, para mejor materialización de estas iniciativas sería importante que se haga realidad el proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia (aprobado por el Pleno del Congreso el pasado día 14 de noviembre), al incorporar la regulación procesal de otros medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional, regulando expresamente tanto la regulación de la reclamación extrajudicial previa como la derivación intrajudicial a medios adecuados de solución de controversias en cualquier procedimiento y en cualquier momento del mismo, sea en primera instancia, apelación o ejecución.

Me implicaré en mejorar el nuevo servicio de mediación penal en todas las capitales de provincia y animar desde esta Presidencia a los profesionales de la justicia a aprovechar este recurso que acaba de implantarse en nuestra Comunidad Autónoma, si bien muestra muy distinto resultado y acogida según la provincia afectada.

Trataré de intensificar y generalizar en el territorio judicial del TSJA el programa “Educar en Justicia”, cuyo objetivo es acercar la justicia a los jóvenes, para que puedan conocer cómo es el funcionamiento de uno de los poderes del Estado.

Dicho programa tiene dos vertientes en nuestro ámbito territorial. Por una parte, institutos y colegios de Andalucía acuden a la sede de la Real Chancillería para visitar el edificio y conocer el funcionamiento de la Justicia o asistir a vistas que se celebren en el edificio. A lo largo del año, son una media de entre diez y veinte centros educativos los que acuden al edificio. Por otra, en las distintas provincias hay jueces o magistrados que se ofrecen para llevar a cabo el programa, de forma que acuden a los centros educativos y, después, los alumnos acceden a la sede judicial. En el ámbito del TSJA, se lleva a cabo el programa por parte de jueces y magistrados (el número fue de 20 el pasado año, aproximadamente) en Huelva, Málaga, Sevilla, Fuengirola (Málaga), Melilla, Chiclana de la Frontera y La Línea de la Concepción (Cádiz), Alcalá la Real (Jaén), Alcalá de Guadaira (Sevilla), etc.

El número aproximado de alumnos que participaron en el programa el curso pasado fue de 900 alumnos. El mismo número está previsto para este curso.

**2.** Mejorar la implementación y extensión de medidas sobre personas con discapacidad, actualmente precarias y poco extendidas en los órganos judiciales del territorio.

Creo innecesario detallar las numerosas reuniones con diversos colectivos y entidades relacionadas con el mundo de la discapacidad para conocer de primera mano sus necesidades y problemática en su relación con el ámbito judicial. En este sentido, trataré de involucrarme al máximo para mejorar la situación actual y garantizar mejor accesibilidad física, utilización de lenguaje claro, así como de materiales en formatos accesibles (braile, audio, lectura fácil, etc.), participación del profesional facilitador para tareas de adopción y ajuste necesarios para entender y ser entendida, para lectura o transcripción de sentencias, disponibilidad de intérpretes o sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, acompañamiento por persona de su elección, etc.

Especial atención a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, al tiempo que, a menudo, los servicios de apoyo no están adecuadamente adaptados para atenderlas. Estamos colaborando actualmente en un protocolo andaluz para la atención de dicho colectivo que garantice la atención integral y coordinada, la plena adaptación de los servicios de atención, personal capacitado y, en fin, fomento de la autonomía personal y decisiones bien informadas.

**3.** Intensificaré la colaboración con las delegadas de igualdad del territorio del TSJA para aplicación de medidas de conciliación, recibir quejas o reclamaciones, colaboración con la Sección de prevención de riesgos laborales del CGPJ y representantes judiciales, actividades de formación descentralizada, etc.

**4.** Profundizar en mejoras del sistema organizativo de trabajo de jueces y magistrados.

Lo ideal sería extender no sólo el ámbito territorial de ciertas jurisdicciones, sino concentrar y/o agrupar partidos judiciales limítrofes (no habría que eliminar ninguno de los actuales partidos, al contrario, seguir aprovechando con mayor eficiencia y eficacia los actuales recursos personales y las infraestructuras judiciales), si bien esta propuesta no está plenamente contemplada y dimensionada en el proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. En efecto, el artículo 84 LOPJ parte de la existencia de un Tribunal de instancia en cada partido judicial, de forma que sólo de forma temporal y excepcional, y exclusivo al ámbito de la instrucción penal para ciertas actividades delictivas, se contempla la agrupación de partidos judiciales limítrofes (nuevo artículo 88, apartados 4, 5 y 6).

Por ello, seguiré trabajando en diversas opciones o líneas de actuación organizativas, algunas ya implementadas en ciertos territorios y ámbitos jurisdiccionales, como se comenta seguidamente.

**4.1** Profundizar en la necesaria especialización jurisdiccional y comarcalización de ciertos Juzgados, demandada, singularmente, en Juzgados de Familia, Infancia y Capacidad, así como de Violencia contra la Mujer, contra la infancia y la adolescencia.

Pretendemos implementar la especialización en materia de familia, infancia y capacidad en el partido judicial de Cádiz, expediente actualmente en curso.

Será conveniente generalizar la especialización en materia de Violencia sobre la Mujer en uno o varios de los actuales Juzgados de lo Penal por capital de provincia, tal y como establece el proyectado artículo 90.3 LOPJ. Por el momento, sólo las ciudades de Málaga, Jaén, Huelva y Córdoba cuentan con esta medida implementada (en base a la disposición final primera de la LO 13/2015, de 5 de octubre, que modificó el apartado 2 del artículo 89bis LOPJ).

Distinto es la iniciativa de la Sala de Gobierno para extender la competencia territorial de los Juzgados especializados de Violencia sobre la Mujer. Así, tras el camino iniciado en el Campo de Gibraltar, de forma que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras extiende su jurisdicción a los partidos judiciales de La Línea de la Concepción y San Roque, se han realizado propuestas complementarias durante el año 2024: a) la extensión de la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Almería al partido judicial de Roquetas de Mar, c) del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cádiz a los partidos judiciales de San Fernando y de Puerto Real, b) del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada al partido judicial de Santa Fe, c) del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén al partido judicial de Martos, d) de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Málaga al partido judicial de Torremolinos, e) del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Marbella al partido judicial de Estepona.

**4.2 Planes de sustitución entre varios partidos judiciales limítrofes durante fines de semana alternos y ausencias de corta duración** En el ámbito del TSJA se ha trabajado en esta iniciativa ante la constante necesidad de sustitución durante fines de semana alternos y en los supuestos de ausencia de corta duración de los titulares en los numerosos partidos judiciales de este territorio que sólo cuentan con un órgano judicial. Esta incidencia era normalmente satisfecha mediante el llamamiento de un juez sustituto. Ante ello, la Sala de Gobierno ha ido aprobando planes de sustitución entre varios partidos judiciales y se ha establecido un sistema de sustitución, por un lado, entre aquellos partidos judiciales con un único Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que sean limítrofes, y, por otro lado, entre el partido judicial con Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único y el partido o partidos judiciales que, aun contando con más de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, puedan llevar a cabo la sustitución por razón de su proximidad geográfica. De este modo, se han agrupado, a efectos de sustitución, los partidos judiciales de Vélez-Rubio y Purchena, en Almería; Arcos de la Frontera y Ubrique, en Cádiz; Priego de Córdoba y Baena y Aguilar de la Frontera y Puente Genil, en Córdoba; Huéscar y Baza, en Granada; Úbeda y Baeza, en Jaén; y Antequera y Archidona, en Málaga.

El mantenimiento de esta línea de actuación pretendemos abordarla a otros en similar situación, aunque ya no se trate de partidos judiciales con un único Juzgado, siempre que concurran razones de proximidad y, al menos uno de ellos, cuente con sólo dos órganos judiciales.

**4.3 Otra medida más expansiva será unificar partidos judiciales a los efectos de prestación del servicio de guardia.** Ya está en funcionamiento en los partidos judiciales de Arcos de la Frontera (4 jueces) y Ubrique (1 juez), ambos de la provincia de Cádiz, al tiempo que la Sala de Gobierno ha iniciado el trámite correspondiente para los partidos judiciales de Cazalla de la Sierra (un juez) y Lora del Río (3 jueces), ambos de la provincia de Sevilla.

**4.4** De singular relevancia sería la propuesta en estudio de creación del “Tribunal de Instancia del Campo de Gibraltar (Cádiz)”, con la consiguiente unificación de los partidos judiciales de Algeciras, San Roque y La Línea de la Concepción. Evidente, esta iniciativa deberá acomodarse a la previsible regulación legal del nuevo artículo 88 LOPJ, de forma que sólo sería factible en un período de tiempo y limitada a la instrucción de procesos penales relacionados con el incremento de las actividades delictivas de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas o personas, lo que repercute en un destacado aumento en el volumen de asuntos penales en esta zona geográfica.

Esta iniciativa serviría para el estudio de similar medida en los partidos judiciales de Barbate y Chiclana de la Frontera, si bien somos conscientes de su dificultad, ya que el legislador supedita la efectividad de dicha decisión a que, en todo caso, “no implique el aumento de dotaciones presupuestarias”.

**4.5** Me esforzaré en conseguir la mejor gestión de las sustituciones ante vacantes de cierta duración por diversidad de licencias y permisos de los titulares de los órganos judiciales, procurando una efectividad del principio de excepcionalidad del llamamiento de magistrados suplentes y jueces sustitutos, algo sumamente dificultoso en el territorio judicial del TSJA.

En este sentido, sin mencionar los permisos ordinarios y vacaciones, el resto de licencias y permisos concedidos (incapacidad temporal, riesgo de embarazo, maternidad y paternidad, lactancia) supone un porcentaje superior al 20% de la plantilla total de titulares, lo que evidencia la importancia de este apartado de gestión de las sustituciones profesionales. Sin ánimo de exhaustividad, dejamos reflejado que en el momento presente llevamos computadas un total de 208 licencias: 16 por riesgo durante el embarazo, 36 por maternidad y paternidad, 24 por lactancia y 132 por incapacidad temporal.

Destacaré, por ello, la importancia de diversas Circulares de la Presidencia, anualmente actualizadas, sobre planes anuales de sustituciones, sobre el protocolo regulador del llamamiento de magistrados suplentes y jueces sustitutos, adaptadas a la cambiante legislación y disponibilidad presupuestaria, así como sobre permisos y vacaciones (ver archivo adjunto).

#### **5. Mantener e iniciar planes de refuerzo en algunos partidos y jurisdicciones.**

Hay que partir necesariamente de la especial problemática judicial del TSJA, cuyo nivel de asuntos ingresados nos sitúa en la parte más alta a nivel nacional: nuestra tasa de litigiosidad es superior en un 7,6% a la media estatal. En este contexto, contamos con 1.041 plazas judiciales en el ámbito de este Tribunal Superior de Justicia, lo que supone una ratio de 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, lo que obliga a insistir en la necesidad de medidas de apoyo judicial y refuerzo en órganos judiciales sobrecargados o mal dimensionados.

Hay que actuar en la solución a situaciones complicadas que atraviesan algunas jurisdicciones. En este sentido, se ha conseguido últimamente reforzar algunos partidos judiciales mixtos (Barbate, Estepona, Lora del Río, Torrox), medidas que deben mantenerse al tiempo que extenderlas a otros partidos de singular complejidad (Sanlúcar la Mayor, Utrera, Chiclana de la Frontera, Roquetas de Mar, Berja, Moguer, Vera, entre otros).

Hay que mantener e implementar refuerzos para situaciones complicadas que atraviesan la jurisdicción civil, mercantil y social. Es necesario iniciar durante 2024 planes de apoyo para los Juzgados de Primera Instancia en muchas capitales de provincia y otros partidos, máxime ante la escasa creación de nuevas plazas. Queremos cuanto antes articular nuevas medidas de apoyo judicial para Juzgados de Primera Instancia en Almería y Málaga, a ser posible con adscripción de JAT.

Ya hemos adelantado iniciativas para los Juzgados de lo Mercantil. Durante varios años mantienen Jueces de refuerzo los Juzgados de lo Mercantil de Cádiz, Málaga y Sevilla. Por otra parte, han continuado las experiencias positivas de trabajo colegiado en Málaga y Sevilla, que debemos extender a todas las capitales de provincia con dos o más titulares de lo mercantil, máxime ante la previsible implementación de los Tribunales de Instancia.

En la jurisdicción social de Sevilla pretendemos mantener el plan de refuerzo con dos Jueces de Adscripción Territorial y dos jueces en comisión de servicio o sustitutos, agrupados en una estructura organizativa que cuenta con LAJ y funcionarios. Igualmente, la jurisdicción social de Almería seguirá con refuerzo de dos Jueces de Adscripción Territorial. En Jerez existe igual refuerzo en lo social con un Jat. En Málaga queremos implementar similar iniciativa para los Juzgados de lo Social, lo que se acaba de examinar por la Sala del Gobierno del TSJA

Asimismo, seguirán adscritos Jueces de Adscripción Territorial con funciones de refuerzo en Juzgados de Cádiz y Sevilla que mantienen el conocimiento de los asuntos relativos a condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

También cuentan con medidas de refuerzo los dos Juzgados especializados en capacidad de las personas de Granada y Málaga.

Y, en fin, pretendemos estudiar refuerzos en los Juzgados de lo Penal, singularmente en Málaga, si bien tenemos el problema de la falta de jueces disponibles al efecto, al tiempo que seguimos pensando que la puesta en marcha de Servicios Comunes de Ejecución es, casi con toda probabilidad, la medida que puede resultar más efectiva de cara a reducir la elevada pendencia.

En esta línea, sería sumamente beneficioso disponer de una mayor plantilla de Jueces de Adscripción Territorial, a la vista del índice de vacantes de larga duración por licencias de distinto tipo, lo que permitiría contar más jueces profesionales para sustituciones y, sobre todo, permitir desarrollar un ambicioso plan de refuerzo de los órganos judiciales más necesitados.

Por otro lado, y por lo que respecta a nuestro ámbito de responsabilidad, creo oportuno comentar la gestión de los JATs, así como de los jueces en expectativa de destino, donde se ha instaurado una actuación, plenamente transparente para la Sala de Gobierno, con audiencia de Decanos y Presidentes de APs., que intenta conciliar varios parámetros: la estabilidad temporal en los destinos, priorizar la sustitución al refuerzo, la audiencia a los afectados y sus necesidades de la conciliación, y, en fin, respeto a la preferencia escalafonal cuando se ofertan al mismo tiempo varias plazas a distintos jueces.

Finalmente, en todo este contexto de planes de refuerzo, ocioso resulta decir que seguirá siendo constante la comunicación con las Administraciones, así como la petición de mayor compromiso y esfuerzo para designar LAJ y funcionarios; en caso



contrario, nuestra apuesta gubernativa-judicial carecerá de sentido y eficacia, quedando totalmente frustrada la operatividad de jueces de refuerzo, al no venir también acompañada de la asignación de funcionarios para posibilitar mayor tramitación de asuntos, celebración de juicios y vistas, impidiendo avanzar significativamente en la normalización del Juzgado o partido judicial afectado por la medida.

**7.** Implicación plena en promover el avance y pronta implantación en nuestra Comunidad Autónoma del sistema organizativo propio de la nueva oficina judicial ante la dificultad intentada durante años precedentes para experiencias colegiadas de trabajo. Singularmente es obligado ante la nueva organización judicial que contempla el proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia.

Desde la Presidencia se ha insistido con vehemencia a los distintos responsables de la Consejería de Justicia durante cada anualidad, aunque sin éxito. Sólo se ha materializado en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, pertenecientes al ámbito prestacional del Ministerio de Justicia, así como en los partidos judiciales de El Ejido (Almería) y Velez-Málaga. Por el momento, pues, se constata una implantación meramente testimonial de la NOJ en nuestra Comunidad Autónoma, pese a que el Decreto 1/2014, de 14 de enero, por el que se regula la organización y estructura de las Oficinas Judicial y Fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía, basaba su implantación en *“una necesidad legal y de gestión”*.

No podemos hablar de un balance aceptable y hay que implicarse en un cambio radical al respecto, máxime si se materializa la reforma de ley orgánica antes comentada, aprobada por el Pleno del Congreso de Diputados el pasado 14 de noviembre.

**7.1** En este interregno y nuevo escenario, seguiremos insistiendo en la necesidad de implantar y generalizar Servicios Comunes de ordenación de procesos de ejecución. La Sala de Gobierno lo lleva demandando con reiteración y ha sido nula la receptividad de la Consejería de Justicia al respecto. El artículo 438 del proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia contempla esta opción conforme a las específicas necesidades y entendemos que la puesta en marcha generalizada de estos servicios comunes es, casi con toda probabilidad, tanto en la ejecución civil como penal, la medida que puede resultar más efectiva de cara a reducir la elevada pendencia en este tipo de órganos judiciales y, seguramente, evitaría ampliar significativamente la planta judicial en esta jurisdicción unipersonal.

**7.2** En similar línea de actuación, reiteraré que es esencial que la Consejería de Justicia se implique en ciertas medidas inmediatas destinadas a mejorar la información, el trato y atención personalizada al ciudadano a través de “otros servicios comunes”, en línea con el artículo 438 del proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. Se trata de asegurar una correcta información y atención al ciudadano, como establece la Carta de Derechos del Ciudadano y el Plan de Transparencia Judicial, de la que carecen la inmensa mayoría de las dependencias judiciales andaluzas.

**7.3** Mientras se consigue la plena implementación de la nueva organización judicial, trataré de implicar a la Consejería de Justicia en el camino de racionalización

de la estructura y redistribución de efectivos para acabar con las actuales distorsiones de nuestra organización de trabajo: órganos con exceso de personal, ausencia absoluta de movilidad en el inmediato entorno laboral, alto número de interinos y ausencia de especialización, falta de correcta gestión y dirección de la oficina, deficiente control de jornada laboral y horario de trabajo, ordenación de la actividad profesional y períodos de descanso (licencias, permisos y vacaciones), formación inicial y continua, comisiones de servicio, potestad disciplinaria, que deja en entredicho la eficaz gestión de la oficina judicial y pone en tela de juicio la eficacia y eficiencia del actual sistema.

Es urgente e imprescindible la reordenación de efectivos y mejor optimización de los recursos personales, asignatura -truncal- pendiente de la Administración, ya que tenemos funcionarios que no están bien empleados ni bien distribuidos, de forma que contamos con plantillas sobredimensionadas y, por el contrario, muy escasas en otros lugares de trabajo, lo que repercute en el resultado final.

Por lo mismo, pretendo implicar a la Consejería de Justicia en que adopte medidas más contundentes que permitan complementar los refuerzos relativos a jueces que se adoptan por la Sala de Gobierno. En efecto, en la previsible situación de interinidad debe trabajar en una doble línea de actuación respecto de los Servicios de Apoyo de Extensión Territorial Variable (SAETV): a) ampliar el número de funcionarios adscritos en cada provincia, b) necesidad de que puedan desempeñar su cometido en todos los centros de trabajo comprendidos en su ámbito provincial.

Mejorar y redimensionar esta figura, aunque sea de forma temporal hasta la total implementación de la nueva organización judicial, supondría contar con el personal más idóneo para medidas de refuerzo y apoyo temporal por muy diversas circunstancias. De esta forma, se convertirían en el personal más idóneo para medidas de refuerzo y apoyo temporal, al tiempo que se aúnan las iniciativas de diferentes instituciones y se pueden lograr mejores resultados; en otro caso, serán ineficaces las medidas puntuales de refuerzo que se adoptan desde el ámbito gubernativo judicial y que exigen apoyo extra de funcionarios.

**8.** La última línea de actuación se centra en el aspecto tecnológico y quiere reflejar que trabajaré con intensidad, como se viene haciendo en los últimos años, para garantizar una mejor prestación del servicio público de Justicia por medios digitales, sin duda un desafío muy importante para la Consejería de Justicia, ya que todavía estamos muy lejos de la meta,

Hasta el momento han sido múltiples e innumerables las reuniones y gestiones de todo tipo (a nivel personal y telefónico, reuniones de Sala de Gobierno y de Comisión Mixta), que deberán seguir produciéndose, en aras a mejorar el nuevo sistema de gestión procesal @Adriano, implantado a finales de junio de 2024 en toda la Comunidad, si bien con múltiples contratiempos e incidencias para los usuarios, agravadas por la lentitud en su solución y atención (telefónica o presencial), reiterándose peticiones y quejas de todo el conjunto de jueces, Lajs y funcionarios, a quienes hay que agradecer su comprensión.

La Sala de Gobierno seguirá respaldando la implementación de las nuevas tecnologías, entendiendo que su apoyo es vital para poder conseguir los cambios organizativos y tecnológicos necesarios. En esta línea se ha hecho imprescindible dictar un buen número de acuerdos para una mejor planificación y desarrollo del

sistema de gestión procesal @adriano, así como corrección de gran número de incidencias. Y en ese camino pretendemos continuar para que la Consejería de Justicia ponga toda su diligencia y los mejores recursos.

Estamos insistiendo reiteradamente en conseguir con urgencia la plena incorporación telemática del Ministerio Fiscal para generalizar el EJE en toda la jurisdicción penal. Por lo mismo, queremos generalizar cuanto antes la itineración de expedientes electrónicos y la transmisión de documentos electrónicos y la interoperabilidad de datos entre cualesquiera órganos judiciales y/o fiscales del territorio del TSJA.

Se insistirá también en la urgencia de contar con un expediente electrónico correctamente formado e indexado, para materializar la plena y mejor digitalización de procedimientos judiciales y gestión documental. Para ello se han propuesto ya grupos de trabajo con magistrados por cada orden jurisdiccional, que deberán constituirse y formular propuestas a la mayor brevedad.

Y, en fin, mantendremos la exigencia de puesta a disposición de los usuarios de un punto de acceso general a través del cual puedan, de forma sencilla, acceder a la información y servicios (todo ello, con un punto de acceso único), presentar solicitudes y recursos, acceder a las notificaciones y comunicaciones, etc., como establece la Carta de Derechos del Ciudadano y el Plan de Transparencia Judicial. Todo ello, en un contexto de necesaria renovación de equipos informáticos.